

244 - CS 28 Decreto 29/1988, de 24 de marzo, por el que se regula el régimen de colaboración y asistencia en materia de inspección del consumo entre la Junta de Comunidades y las Entidades Locales de Castilla-La Mancha

(DOCM 15 de 12-04-1988)

La defensa de los consumidores y usuarios es atribución de la Junta de Comunidades, a quien corresponde la función ejecutiva en esta materia, en su ámbito de actuación, según dispone el artículo 33 del Estatuto de Autonomía. (*)

(*) *Artículo 32.6 Según redacción dada por LO 3/1997.*

La actividad pública encaminada a la protección de los aludidos derechos, ha sido abordada en nuestra Comunidad Autónoma, principalmente desde la perspectiva de una coordinación interadministrativa, en concordancia con los principios señalados en el artículo 103.1 de la Constitución española y la Ley número 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Fruto de esta coordinación que pretende hacer eficaz la defensa del consumidor en su consideración de principio rector de la política social y económica, e informador del Ordenamiento jurídico, que consagra el artículo 51.1 y 2 de la Constitución; se procedió a la creación del Consejo Castellano-Manchego de Consumo, por Decreto 23/1986, de 1 de abril, y a la firma de un Convenio de colaboración en materia de consumo entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y la Federación de Municipios y provincias de Castilla-La Mancha, para 1986, renovado con fecha 2 de marzo de 1987.

En este sentido, y avanzando en la línea de cooperación escalonada que ha presidido la actuación de la Junta de Comunidades en materia de Consumo, no cabe desconocer el conjunto de facultades que tanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios, como la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuyen a las Entidades Locales en esta materia, siendo así necesario establecer una normativa que permita, en concordancia con los aludidos principios, sentar las bases de una eficaz articulación de actividades, en muchos casos dispersas y atomizadas, de las Administraciones Públicas competentes.

Dado que la actividad inspectora en materia de consumo, regulada por el Real Decreto 1945/1983, presenta una especial complejidad, por cuanto supone un considerable despliegue de medios y exige un alto nivel de coordinación, se considera oportuno concretar dicha coordinación sobre las bases del artículo 57 de la vigente Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, tomando como antecedentes el Decreto 1836/1975, de 24 de julio, sobre colaboración de los servicios municipales de inspección con los del Estado.

En su virtud a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social, oído el Consejo Castellano-Manchego de Consumo y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su reunión del día 24 de marzo de 1988, dispongo

Artículo 1

La coordinación de la actividad inspectora en materia de consumo podrá establecerse mediante convenios de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias reconocidas a las partes firmantes, en el campo de la defensa del consumidor y usuario.

Artículo 2

Los mencionados convenios determinarán el perfil profesional de los agentes locales de inspección y posibilitarán el ejercicio coordinado de la actividad inspectora entre la entidad correspondiente y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, según el alcance que se establezca.

Artículo 3

De conformidad con el aludido Convenio, los agentes locales de inspección podrán ser acreditados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante tarjeta, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia e inspección a propuesta del presidente de la Entidad respectiva, quien lo comunicará al Delegado de Sanidad y Bienestar Social de la provincia que se trate.

Artículo 4

La tarjeta de acreditación será expedida por la Dirección General de Consumo y consignará la firma del Presidente de la Entidad Local y del titular de la misma; dicha tarjeta facultará para ejercer la actividad inspectora en las materias regulada en los artículos 3 y 5 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, quedando limitada en su ejercicio al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias la Entidad Local peticionaria, de acuerdo con los fines de la misma.

Artículo 5

La actuación de los inspectores locales se regulará por lo señalado en los artículos 13 y 15 del mencionado Real Decreto 1945/ 1983, de 22 de junio.

Artículo 6

Las actas levantadas por los agentes locales de inspección y demás diligencias a que hubiere lugar se remitirán al Delegado Provincial de Sanidad y Bienestar Social por el Presidente de la Entidad si éste apreciase en el contenido de dicha comunicación hechos constitutivos de infracción administrativa en materia de defensa del consumidor. El Delegado Provincial, una vez efectuada la recepción y registro, previo examen de la documentación remitida, decidirá si ha lugar o no la incoación del expediente por infracción. En caso afirmativo, procederá a nombrar instructor de actuaciones.

Artículo 7

El instructor del expediente podrá requerir la colaboración que considere oportuna a los agentes locales que hubieran realizado las actuaciones preliminares correspondientes, a fin de que lleven a cabo o completen las diligencias que se estime oportuno practicar.

Artículo 8

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social facilitará la adecuada formación a los agentes locales con carácter previo a su acreditación y emitirá informe a la Entidad Local sobre el aprovechamiento obtenido por los mismos.

Artículo 9

Las Entidades Locales colaboradoras podrán beneficiarse con carácter preferente de las ayudas económicas que anualmente distribuye la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, para hacer frente a los gastos que la actividad inspectora origine, en la proporción que se determine en su caso.

Artículo 10

Por parte de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social se organizará al menos con carácter anual cursos de reciclaje y especialización destinados a inspectores locales de consumo.

Artículo 11

El ámbito del Convenio aludido podrá afectar a la concertación de laboratorios de análisis y de control de calidad de alimentos, haciendo extensivas las ayudas económicas aludidas, en el marco de programas concretos de actuación inspectora.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Se faculta al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Bienestar Social para dictar las Disposiciones complementarias que requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

* * *